

ANZOÁTEGUI Y MONAGAS EN EL OLVIDO

■ AGUA:

EL DERECHO HUMANO QUE ESCASEA
EN LA CAPITAL DE MONAGAS

■ AGONÍA QUE DEBILITA

A LOS ANZOATIGUENSES ANTE LOS
INACCESIBLES SERVICIOS PÚBLICOS

■ MONAGUENSES

PASARON DE COCINAS DE GAS A IMPROVISAR FOGONES

AMNISTÍA
INTERNACIONAL





Amnistía Internacional no comparte necesariamente las opiniones expresadas en los artículos firmados, ni las afirmaciones de las personas entrevistadas.

Amnistía Internacional, fundada en 1961 y presente en más de 150 países y territorios, es un movimiento que trabaja con total independencia política y económica.

Puedes encontrar campañas, llamados a la acción y noticias sobre el trabajo de Amnistía Internacional en [amnistia.org](https://www.amnistia.org)

CRÉDITOS

COLABORADORES

GIOVANNA PELLICANI
MARIANA GONZÁLEZ LATUFF
MARÍA GÓMEZ
CLAUDIA ELENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
MARCO AURELIO HERNÁNDEZ
LUIS VILLAFRANCA
FRANCISCO ZAMBRANO
NATACHA SÁNCHEZ

FOTOGRAFÍAS

ANDREA VARGAS
ROBNKY RODRÍGUEZ
LUIS BOADA
RUBY GONZÁLEZ
SHUTTERSTOCK
GETTY IMAGES
AMNISTÍA INTERNACIONAL

EDICIÓN Y CORRECCIÓN

DANIELA DAMIANO
VIVIAN DIÁZ

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

MARIALEJANDRA JAIMES BRICEÑO

ILUSTRACIONES

RAYMOND TORRES (CONCEPTO)
DANIELA OROZCO (DESARROLLO)

SUMARIO

4 EDITORIAL

6 AGONÍA QUE DEBILITA A LOS ANZOATIGUENSES ANTE LOS INACCESIBLES SERVICIOS PÚBLICOS
GIOVANNA PELLICANI

12 MONAGUENSES PASARON DE COCINAS DE GAS A IMPROVISAR FOGONES
MARIANA GONZÁLEZ LATUFF


16 CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN FORZADA: FALTA DE PERSONAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES
MARÍA GÓMEZ

20 AGUA: EL DERECHO HUMANO QUE ESCASEA EN LA CAPITAL DE MONAGAS
CLAUDIA ELENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

24 MONAGAS PROTESTA ANTE LA CARENCIA DE DERECHOS
MARCO AURELIO HERNÁNDEZ BETHERMY Y LUIS VILLAFRANCA

28 LOS QUE NO SE RINDEN, REDHANZ: ÚNICOS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN ANZOATEGUÍ
FRANCISCO ZAMBRANO/RUNRUNES

32 EN MATURÍN IMPROVISAN VERTEDEROS DE BASURA ANTE LA FALTA DE ASEO URBANO
NATACHA SÁNCHEZ



“Los Estados Anzoátegui y Monagas forman parte del oriente de Venezuela. Son estados cuyas economías han sido favorecidas históricamente por la existencia de yacimientos de petróleo, de gas natural y una variada capacidad agrícola y ganadera; sin embargo, la verdad de las personas que habitan esos estados hoy en día está marcada por carencias, servicios que fallan, represión en las protestas y múltiples vulneraciones a los derechos humanos.

La revista “Anzoátegui y Monagas: En el olvido” pretende mostrar de la mano de activistas y periodistas que viven en esa región del país la grave crisis de derechos humanos que padecen tanto anzoatiguenses como monaguenses, en un contexto de crisis humanitaria a más de un año de la pandemia por Covid-19.

Con una población que supera los dos millones de habitantes distribuidos entre 21 municipios, con la inclusión del Complejo Petrolero más importante de Latinoamérica y con cuatro imponentes plantas potabilizadoras que deberían garantizar el abastecimiento para toda la población, hoy los habitantes de Anzoátegui están sumidos en la angustia por no tener acceso con regularidad a los servicios públicos.

La escasez de agua es una constante en estos dos estados. Su gente comparte la misma historia que no parece terminar: encontrar agua a como dé lugar para abastecer el hogar y poder mantener la higiene básica, factor que se ha hecho determinante en los últimos tiempos para evitar el contagio por el nuevo virus. Sin embargo, impera en la mayoría de los hogares de estos estados la falta de agua potable, que les impide a las personas no solamente cocinar o mantener una adecuada higiene, sino también protegerse frente a la Covid-19. Las protestas en exigencia al restablecimiento de los servicios básicos no han faltado en los últimos años. Además de la falta de agua potable, denuncian los constantes cortes eléctricos y la ausencia del gas doméstico para poder cocinar. La leña se ha vuelto el artículo de primera necesidad si se quiere preparar algún alimento.

El sistema de transporte se ha visto afectado por la ausencia de combustible. No solamente las personas con automóviles particulares



denuncian no poder ir a sus lugares de trabajo o la imposibilidad de los transportistas de prestar su servicio; la escasez de combustible ha configurado un escenario tan cruel que impide a las pocas ambulancias que existen trasladar de emergencia a personas que necesitan atención médica.

Los profesionales de la salud trabajan en hospitales colapsados, que no tienen insumos y en condiciones precarias que no garantizan su bioseguridad ante la Covid-19. Como en el resto del país, sus salarios los condenan a la pobreza extrema, deben recorrer largas distancias para llegar a sus lugares de trabajo y además son amedrentados y amenazados si elevan su voz para exigir derechos.

La Covid-19 no es la única enfermedad que presenta altos niveles de incidencia en estos estados. Cada vez es más notorio el resurgimiento de enfermedades anteriormente controladas o erradicadas, como el dengue, la malaria o la tuberculosis.

La migración forzada también ha dejado muchos espacios vacíos. Habitantes de ambos estados denuncian la falta de personal en los planteles

educativos, centros de salud e instituciones públicas. Los niños, adolescentes y personas mayores son quienes han sufrido la peor parte de ver partir a sus familiares, pues existe una gran cantidad de adultos mayores solos en situaciones de vulnerabilidad con niños y adolescentes a su cargo esperando remesas desde el exterior. Sin embargo, la pandemia dejó sin empleo y en situación de vulnerabilidad a muchos refugiados y migrantes, lo que ha imposibilitado enviar dinero para la subsistencia de sus familiares en Venezuela.

Pese a la crisis en derechos, en estos estados existen organizaciones de la sociedad civil que luchan para que las personas vuelvan a vivir con dignidad. Ejemplo de esto es Redhantz, una coalición de 15 organizaciones no gubernamentales del oriente venezolano que trabajan para defender los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta región del país.

Agradecemos el esfuerzo de periodistas, activistas y valientes personas que a pesar de sufrir todas las consecuencias que, dieron su testimonio para visibilizar la situación de vulneración de derechos.

AGONÍA QUE DEBILITA A LOS ANZOATIGUENSES ANTE LOS INACCESIBLES SERVICIOS PÚBLICOS

► POR GIOVANNA PELLICANI

Con una población que supera los dos millones de habitantes distribuidos entre 21 municipios, con la inclusión del Complejo Petrolero más importante de Latinoamérica y con cuatro imponentes plantas potabilizadoras que deberían garantizar el abastecimiento para toda la población, hoy el estado Anzoátegui está sumido en la angustia por no tener acceso con regularidad a los servicios públicos.

Muchos como Antolina Coa, sienten que han perdido la batalla ante los continuos ataques que enfrentan para tener una vida digna en la región. Ella cuenta que en el transcurso de sus 67 años de edad no ha padecido tanto como en los últimos 20 años de su vida.

“Vivo de la caridad del Gobierno que con el mísero aporte que nos da con las pensiones solo puedo comprar mi pastilla para la tensión, pero muchas veces no tengo como tomármela porque en el sector donde vivo, el agua llega una vez cada 30 días”, contó.

La delgadez de su piel y sus desgastadas manos son el reflejo de las necesidades que ha tenido que atravesar desde que fue arropada por la crisis compleja, económica y social en Venezuela, pero que ha tenido que soportar por considerar que no tiene otra opción.

Antolina camina 16 cuadras a diario para llegar a la calle principal del sector Pozuelos en Puerto La Cruz, lugar donde habita, y así poder llenar un balde de agua que carga con dificultad de regreso al hogar en el que reside junto a su nieta de seis años de edad. Su hija tuvo que migrar a otro país en la búsqueda de una mejor calidad de vida y con la intención de garantizarles la alimentación diaria.

“Se me han muerto dos nietos por desnutrición. La primera era una niña bella que tenía una condición motora, pero que cuidaba como a mi vida, no soportó más el hambre y falleció. El segundo fue un

bebé de cuatro meses a quien alimentamos con lo poco que conseguíamos, pero necesitaba lactancia materna y su mamá nunca produjo leche. Es muy doloroso todo esto”, relató.

La cansada abuela ha tenido que cocinar a leña porque hace tres meses no ha podido comprar una bombona de gas, ya que se han tardado en la distribución autorizada por los Consejos Comunales y no cuenta con los tres dólares que cobran los revendedores por un cilindro lleno.

El balde de agua lo distribuye para bañar a su nieta, cocinar y lavarse las manos. Visiblemente afectada asegura que muchas veces evita bañarse para poder hervir agua, y garantizar de esta manera la hidratación de la pequeña, quien dejó de estudiar por no tener uniforme y ahora por no contar con un equipo celular e internet para recibir las actividades diarias y enviar a las docentes.



La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 28 de julio de 2010 una resolución en la que se establece que el acceso a fuentes de agua potable y segura, son un derecho humano fundamental para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos, pero el Estado venezolano no ha procurado garantizar los servicios públicos que cada vez son más precarios en el país.

El presidente de la fundación Agua para Todos en el estado Anzoátegui, Rodolfo Gil, cuenta que el suministro de agua potable está en riesgo debido a la falta de inspección, organización e inversión, lo que ha debilitado el servicio a tal punto de secar las tuberías en 80% de las comunidades de la entidad.

“La zona norte del estado cuenta con dos plantas potabilizadoras que hoy no son suficientes para garantizar el abastecimiento a la población, pues ellas se surten del canal de Caratal, ubicado en la zona rural del municipio Sotillo, pero que actualmente está contaminado con un sinnúmero de botes de aguas negras que recorren el caudal con libertad y sin ningún tipo de restricciones”.

Gil ha denunciado en distintas oportunidades el grado de contaminación que existe en el canal de agua del que se surten habitantes de los municipios Bolívar, Sotillo, Guanta y Urbaneja, pero hasta ahora sus propuestas y denuncias no han sido tomadas en cuenta.

Ante esta situación el ingeniero civil y expresidente de la Hidrológica del Caribe, Glen Sardí, explicó que la razón por la que en el estado Anzoátegui se desvanece el servicio de agua potable es porque no cuentan con químico suficiente para potabilizar el agua, adicional a la falta de inversión que ha necesitado el canal de Caratal y redes anexas para ampliar la capacidad de distribución en la entidad.

ALZARON LA VOZ

En el estado Anzoátegui se han contabilizado cientos de protestas en comunidades donde exigen el restablecimiento del servicio de agua potable, denuncian los continuos cortes eléctricos y claman por la distribución equitativa y oportuna de los cilindros de gas doméstico y la mayoría de las manifestaciones se han registrado en las zonas Norte y Sur de la entidad, donde existe mayor cantidad poblacional.

En los últimos meses las acciones de calle se han incrementado en la entidad, pues más de 60 comunidades piden a gritos que les garanticen agua potable para poder cumplir con el protocolo sanitario y evitar de esta manera la propagación y contagio de Covid-19, sin embargo, las direcciones municipales no han podido garantizarlo ni con camiones cisternas porque no cuentan con suficiente combustible para ello.





←  FOTO: ANDREA VARGAS

René Salazar vive en la población de Clarines, zona oeste del estado Anzoátegui, y revela que hace 14 meses no llega el agua por tuberías al sector Barrio Obrero de Bruzual, donde más de 230 familias tienen que surtirse de una laguna estancada en la cual también viven animales que hacen sus necesidades, comen y duermen sobre el agua y a orillas de este lugar.

“Yo tengo una carretilla y allí puedo cargar algunas pimpinas de agua, pero muchísimas personas deben hacer hasta cuatro viajes a la laguna al día para poder abastecerse y cubrir por lo menos con las necesidades básicas en sus hogares”, indicó.

La crisis se acentúa cuando la falla en el suministro de agua potable se ve acompañada con

continuos cortes eléctricos, los cuales no cuentan con anuncios programados ni lapso estimado de duración. En algunas comunidades, el servicio eléctrico se ha ausentado por más de tres días consecutivos.

Tal es el caso del sector Colinas de Neverí y la Fundación en Barcelona, donde más de 2.000 mil familias han reportado falta de agua y de luz al mismo tiempo, lo que obliga a algunos a improvisar fogatas que también utilizan para espantar a los mosquitos transmisores del paludismo, casos que no han desaparecido en la entidad en tiempos de pandemia.

PARALIZADOS

La falta de combustible es uno de los detonantes que ha paralizado la movilización en el estado Anzoátegui, donde según reveló el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv), Eudis Girot, siempre se ha mantenido una mínima producción de combustible, pero a este no ha tenido acceso la población.

“En la empresa Súper Octanos manejan a su antojo la mayor cantidad de gasolina que se produce en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui. Allí se producen cinco mil barriles de combustible a diario, los cuales podrían garantizar el abastecimiento progresivo de la población, pero está en control de los gerentes que manejan la mafia dentro de la estatal petrolera”, indicó.

En febrero del 2020 las 63 estaciones de gasolina del estado Anzoátegui fueron cerrando progresivamente y en marzo la suspensión fue total, el manejo de la distribución a través de los mal llamados sectores priorizados lo ha asumido el recién creado Órgano de Dirección para la Defensa Integral en la entidad (ODDI), quienes lo controlan como premio o castigo para los ciudadanos complacientes o afectos a la administración actual.

La escasez de combustible ha generado fallas en el sistema de transporte público y hasta la muerte de personas con enfermedades renales que tenían la necesidad de desplazarse para recibir atención médica, sin embargo, no han tenido prioridad en las pocas estaciones de gasolinas habilitadas.

COLAPSO ANUNCIADO

El artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, pero en la actualidad, esto no se cumple.

En Anzoátegui el sistema de salud ha colapsado y los médicos del Hospital Luis Razetti de Barcelona lo habían advertido. Pero no fue sino hasta que comenzaron a aumentar los contagios por Covid-19 que la autoridad regional reveló la falta de insumos médicos y ahora equipos de bioseguridad que necesitan los galenos en tiempos de pandemia.

El principal centro asistencial del estado atiende a 10.600 pacientes aproximadamente cada mes, según lo explica la directora, Tibisay Triana, quien en distintas oportunidades ha revelado la falta de insumos médicos y el deterioro de algunas áreas por falta de mantenimiento, pero sus súplicas tampoco han sido escuchadas.

Los médicos y especialistas han sido vistos caminar desde sus hogares hasta los centros asistenciales para garantizar la atención a sus pacientes, esto por falta de gasolina y por no contar con un salario digno que les permita la movilización en los vehículos de transporte público.

Con la llegada de la pandemia la crisis se agudizó y con ella se elevó la cifra de muertes de médicos por contagio de Covid-19 en la entidad. Hasta junio de 2021, al menos 40 profesionales de la salud fallecieron por la afección en el estado Anzoátegui.

Tras el incremento de muertes, la indignación ha crecido entre los especialistas del Hospital Centinela Luis Razetti de Barcelona, donde algunos como el presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del centro asistencial, el traumatólogo Oscar Navas, han revelado las condiciones en las que ejercen su labor.



No contamos con alimentos en nuestras guardias, no tenemos agua en algunas oportunidades, los baños están insalubres por falta de personal de aseo y tenemos que dormir en el piso o sobre colchones insalubres”, reveló.

Y así se han sumado malestares, humillaciones y condiciones laborales de riesgo para los más de 6.000 médicos que ejercen en la entidad, razón por la que algunos se han agrupado para obtener alimentos, medicamentos, equipos de bioseguridad y hasta productos de aseo para el hospital al que asiste la mayoría de los habitantes de la entidad.

“Tuvimos que contar con nuestros propios recursos y apelar a la solidaridad de los anzoatiguenses para poder suplir algunas de las fallas que nos aquejan y que ponen en riesgo nuestras vidas a diario. Es muy poco lo que llega al estado para garantizar la vida de nuestros pacientes y la integridad física de nuestros colegas”, destacó.

Es urgente que las autoridades tomen medidas inmediatas a la situación que se vive en el estado Anzoátegui. Desde el acceso a los servicios públicos como al agua y saneamiento son indispensables para sobrevivir a la emergencia humanitaria compleja y a la pandemia.



MONAGUENSES PASARON DE COCINAS DE GAS A IMPROVISAR FOGONES

► POR MARIANA GONZÁLEZ LATUFF

Meses sin recibir el gas doméstico que les permita preparar los alimentos de manera segura y sin tanto sacrificio, hace a los habitantes del municipio Maturín capital del estado Monagas, a improvisar fogones; situación que los hace reducir la compra algunos alimentos para poder pagar el gasoil que les permite encender dichos fogones.

Madres y padres de familias aseguran que se les hace prácticamente imposible poder cumplir las normas del distanciamiento físico y aislamiento en el hogar decretadas para evitar contagios de la Covid-19, porque deben buscar la leña para poder preparar alimentos, limitando aún más el balance nutricional, que se ha visto alterado ante la situación económica y política por la que atraviesa el país, reduciéndose a la elaboración de sopas en alto porcentaje.

Ana Cecilia González, es madre de tres pequeños y se levanta desde la madrugada para prender el fogón y poder alimentarlos. “Prender ese fogón no es fácil, además el poquito dinero que tengo lo gasto comprando gasoil, sin eso el fogón no prende bien. Ya mi piel se ve diferente, paso casi todo el día soplando el fogón y me trago todo ese humo, es demasiado triste todo esto que vivimos”.

Ana, con lágrimas en los ojos, resalta que sus tres niños se han enfermado de problemas respiratorios y no cuenta con los recursos

necesarios para poder comprar las medicinas y cumplir con el tratamiento indicado.

“

Ya no puedo más, no hay nada peor que ver a mis hijos enfermos, pasan noches sin poder dormir de tanto toser, y parece que nadie se acuerda del pobre, sencillamente no les importa”.

Exhortó a las autoridades responsables de la distribución del gas doméstico a surtir del servicio a los hogares,

garantizando con ello permanecer en casa cumpliendo la cuarentena, resguardando la salud de las familias y evitando posibles tragedias por accidentes causados debido a manipulación inadecuada de la leña.

Estudios internacionales han demostrado que cocinar con fogones puede producir enfermedades como cáncer de pulmón, bronquitis, enfisemas o fibrosis pulmonar. Estas prácticas causan alarma en la población, en medio de todas las deficiencias que el sector salud padece y en medio de una pandemia mundial que justamente afecta al sistema respiratorio.

El olor a tablones quemados es común en la comunidad Santa Inés de Maturín capital del estado Monagas, en donde sus habitantes se quejan de que las tuberías de la red de gas doméstico son un monumento inservible.

Asimismo, Pedro Hernández, viudo, padre de 4 niños todos menores de edad, se dedica a trabajar de manera informal, y las pocas horas que le quedan las dedica a buscar leña para cocinar.

“Esto jamás lo vivimos antes, yo tenía mi cocinita y cuando mi esposa vivía preparábamos nuestra comida, ahora estoy solo con mis niños y debo pasar más de medio día buscando no solo alimentos que ya son pocos pues el dinero no alcanza, sino leña y gasoil para cocinar, esto no puede llamarse calidad de vida”.

Hernández resalta que su hijo menor, de tan solo 3 años, tose como un adulto, esto debido a los problemas respiratorios causados por el humo del fogón.



Mi casita no es grande y aquí todos tragamos humos. Yo no tengo para comprar medicinas, a veces le doy tecitos pero así de pequeño tose como un adulto, escucharlo todas las noches me parte el alma. La única forma de cocinar lo poco que traigo a falta de gas por tuberías, es siempre sobre un fogón de leña”.

Pero esta situación no solo ocurre en las comunidades más vulnerables, en los urbanismos la falta de gas doméstico también se hace presente obligando a sus residentes a utilizar cocinas eléctricas como una opción para cocinar; sin embargo, cuando el servicio eléctrico falla esta opción se desvanece ante sus ojos.

María Salazar, cuenta como ha tenido que programarse para cocinar cuando tiene electricidad en su casa. Sin embargo, no siempre corre

con la misma suerte y, muchas veces, se queda sin comer hasta que vuelve la energía eléctrica a su hogar.

“Hay días que me levanto temprano y cocino todo lo que comeré en el día, tratando de que no sea nada que se dañe, porque si se va la luz se me daña en la nevera y eso me da más dolor. He pasado más de 6 horas sin comer porque se me va la luz y no me dio chance cocinar con mi cocinita eléctrica y en apartamento no puedo prender un fogón”.

La solidaridad entre vecinos se ha vuelto común, pues muchos aseguran que es una de las mejores maneras de palear la situación económica y política que se vive en el país. Rafael Mejías asegura que son sus vecinos su familia más cercana y la única capaz de entender lo que se viven actualmente



Esto se cuenta y no se cree. Si tienes agua, no tienes luz. Si llega la luz, te quitan el agua. Si no ninguna de las dos. Aquí es una constante montaña rusa lo que vivimos los venezolanos. Aquí nos apoyamos entre vecinos, es la única manera junto a la fe de sobrevivir en este país”.

Cada día se agrava el déficit en servicios básicos y esto afecta negativamente el desenvolvimiento cotidiano de los venezolanos que se mantienen dentro del país, ante la falla de gas doméstico





los habitantes señalan que comprar una bombona vacía de gas cuesta aproximadamente 50 dólares y llenarla significa invertir 10 dólares.

Cocinar con leña es una modalidad que se extiende no solo a zonas rurales, sino a múltiples ciudades del país. Al respecto, José Pérez destacó: “el gobierno parece no tener una respuesta oportuna e inmediata que permita ver luz al final del camino, aquí no hay respuesta para nadie, estamos a la buena de Dios y ahora quieren que cumplamos cuarentena cosa que entiendo, pero bajo estas circunstancias es prácticamente imposible”.

“

Aquí si uno no sale, te mueres de hambre y si sales te mueres con el virus, la cosa esta bien difícil”, lamentó José Pérez.

La realidad de la mayoría de las familias monaguenses es que muchas veces comen una vez al día, y otras se acuestan sin probar bocado. Además, muchos deben luchar por la falta de empleos formales que no les permite comprar alimentos y otros que cuentan con uno, pero

aseguran que lo que ganan no les alcanza para comprar los productos de la cesta básica.

Las constantes fallas de los servicios públicos, convierte el día a día en una montaña rusa de emociones negativas en el estado Monagas, en donde la fe y la esperanza son el escudo más sólido que les permite ponerse en pie y continuar al día siguiente. Es propicio que las autoridades locales logren consenso para solucionar estos problemas que día a día se convierten en las causas de la profundización de la emergencia humanitaria compleja en todo el país.



CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN FORZADA FALTA DE PERSONAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES

► POR MARÍA GÓMEZ

El Estado Monagas presenta gran déficit de profesionales tanto en los sectores de la educación, la salud, la higiene mental, la prestación de apoyos y atención al público, entre otros, situación que incrementa la vulnerabilidad a la que está expuesta la sociedad venezolana y la monaguense.

Sin servidores sociales los obstáculos para la prestación de servicios eficaces son crónicos y esto impide el acceso de la población a sus derechos esenciales de educación, salud, vida digna, acceso a justicia gratuita y celeridad, ambiente sano, entre otros.

Venezuela atraviesa una crisis social, económica y de vulneración de derechos humanos sin precedentes nacionales e históricos desde hace más de una década, a lo cual, recientemente se

le suma la crisis planetaria por la Covid-19 que amenaza con dejar a Latinoamérica y el Caribe con aproximadamente 45 millones de personas pobres según la Organización de Naciones Unidas, de acuerdo con su reporte “El impacto del Covid-19 en América Latina y el Caribe”.

La pobreza es una realidad palpable en nuestro país y causante además de la mayoría de las problemáticas existentes en el mismo. Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de la región y del mundo, siendo de USD 1,60 (uno con sesenta centavos de dólares americanos).

También son factores determinantes de la crisis social, económica y política: las nulas buenas prácticas sociales, la inestabilidad política y jurídica, el ineficiente manejo de los recursos y la defectuosa administración del Estado.

LA POBREZA EN VENEZUELA

Los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 (ENCOVI), señalan que la pobreza multidimensional en Venezuela afecta a 64,8% de los hogares, lo que representa un incremento de 13,8% entre 2018 y 2019. La pobreza multidimensional está relacionada con indicadores como educación, estándar de vida, empleo, servicios públicos y vivienda.

La pobreza, la falta de crecimiento profesional, el pago irrisorio por la actividad realizada, el abuso de poder, la usurpación de funciones por parte del Estado a los órganos de poder e institutos autónomos del país, el acceso negado a los servicios básico elementales y a una alimentación decente y saludable, el deterioro del sistema educativo primario, secundario y universitario, la negada oportunidad de autorrealización y otros motivos de índoles personales, han sido las reiteradas razones expresadas por la población migrante venezolana ante la pregunta: Durante el ejercicio de su profesión en Venezuela, ¿cuáles eran las vicisitudes más importantes que debía afrontar y cuál fue el motivo que le llevó a emigrar del país?

LA EDUCACIÓN Y LA POLITIZACIÓN

Para mayo del 2017, José Rafael Márquez Contreras de 34 años, Licenciado en Educación Integral, quien vivía en la comunidad del Furrial del Estado Monagas, decide partir del país y asentar su residencia en Ecuador. “Durante el tiempo que ejercí mi carrera profesional en Venezuela, lo más inaceptable que vi era la politización en la educación, donde incluso asumían cargo importantes personas sin preparación, pero simpatizantes del gobierno actual”.



Tomando en cuenta que lo natural es trabajar, vivir de lo que haces, tener una vida digna, me vi en la obligación de tomar la decisión de emigrar con la expectativa de tener una mejor calidad de vida, la cual evidentemente no podía tener en la situación en la que ya se encontraba el país”, dijo Márquez.

La educación en Venezuela en los tiempos presentes muestra signos de la desolación de las instituciones educativas y del daño ocasionado a las mismas por la politización de sus áreas que, en condiciones normales, deben permanecer apolíticas y abiertas al debate, a la producción de ideas y de propuestas de avances y mejoras para la sociedad y el mundo.

“Migrar me ha enseñado lo importante que es tener el valor de tomar una decisión que puede cambiar tu vida. Migrar no es solamente salir de tu país, es tener el coraje de poder establecerse en una nación ajena, pero con la convicción de que las metas y la razón por la que tomaste esa decisión te va a permitir crecer y lograr objetivos”, agregó.

MIGRAR FUE FÁCIL HASTA QUE NO PUDE VER MÁS A MI FAMILIA

Otra perspectiva comparte Martha Elena, médico de 45 años de edad. Es oriunda de la ciudad de Maturín, habitaba en el Sector Juanico, quien partió del país desde el año 2011 en busca de alcanzar sus aspiraciones profesionales y personales.

“Migrar para mí fue fácil, siempre fui una persona que cambiaba mucho de lugar, por ejemplo; mudanzas de hogar, escuelas, colegios, universidad, trabajos, amigos, entre otros. Siempre quise vivir fuera de Venezuela, en otro país con otro idioma, ejercer en otro país, no tuve factores adversos, por ejemplo, mi familia siempre me visitaba dónde iba a vivir”.



“

“Pero las cosas cambiaron cuando comenzó a agudizarse la crisis venezolana, se hizo difícil para mí cuando ya no podía volver a Venezuela. Mi familia comenzó a dispersarse por varios países, mis amigos y conocidos ya no estaban. Cuando todo inició era una época que muchas personas se querían ir, era un deseo de salir del país, porque querían una vida mejor. Los últimos no se querían ir, se tuvieron que ir, los obligaron a irse de su país porque ya no podían sobrevivir”.

La realidad de la crisis nos ha trastocado a todos los venezolanos en diferentes grados y de diversas formas, la pérdida del afecto y la vivencia de momentos con los seres que amas también es una pérdida irreparable, característica notoria de las migraciones forzosas.

VOLVER A EMPEZAR

Jacinto Vásquez, abogado de 27 años, antes de partir vivía en la comunidad de Tipuro. Para él migrar de Venezuela ha significado comenzar de nuevo.

“Establecerme nuevas metas, adaptarme a un nuevo sistema (anglosajón), al cual no estaba acostumbrado. No solamente un nuevo sistema, sino una nueva cultura, un nuevo clima, idioma y estilo de vida. El factor más adverso de esa decisión es estar distante de tu familia, saber que por mucho tiempo no puedes volver a verla. Al tener un estatus migratorio de asilo no puedo volver a Venezuela”.

Los migrantes deben sufrir el desapego emocional tanto de sus familiares y amigos como de sus costumbres y tradiciones, algo que afecta significativamente el desenvolvimiento de vida de esas personas.

RENUNCIAR AL EJERCICIO PROFESIONAL POR MEJOR SALARIO

Ante la pregunta, ¿Ejerce su carrera profesional en el país de acogida donde actualmente se encuentra?, la mayoría de

los entrevistados respondió que no y solo algunas personas pueden establecerse y regular el ejercicio de su carrera profesional conforme al derecho interno del país para sentar sus bases.

En nuestro país cada día se evidencia más la grave crisis de falta de personal en áreas de servicios sociales. La mano de obra cualificada cada día se fuga de nuestro país de forma desmedida y lo preocupante de esa situación tan alarmante es la cruda realidad de que los mismos no logran ejercer más sus carreras y en cambio ocupan puestos laborales sin cualificación profesional.

La migración forzada venezolana es la consecuencia más visible internacionalmente de la emergencia humanitaria compleja, por ello los países receptores deben también ofrecer políticas ajustadas al respeto de los derechos humanos de venezolanos que llegan en la mayoría de los casos sin un plan de vida.

La situación regular y los documentos que puedan facilitar trabajos dignos debe ser prioridad en las políticas de acogida de migrantes y refugiados.

Fuentes:

CNN: La ONU advierte que el covid-19 podría dejar 45 millones nuevos pobres en América Latina y el Caribe [en línea] 10.07.2020. <https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/10/la-onu-advierde-que-el-covid-19-podria-dejar-45-millones-nuevos-pobres-en-america-latina-y-el-caribe/> Consulta del 28/07/2020.

UCAB: Dirección de comunicación, mercadeo y promoción. [en línea] junio, 2020. ENCOVI UCAB: VENEZUELA ES EL PAÍS MÁS POBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL PERFIL NUTRICIONAL SE ASEMJA A PAÍSES DE ÁFRICA. Disponible en: www.UCAB.edu.ve

Participantes de las entrevistas:

- i. Martha Hernández, Médico Especialista en Gastroenterología, habitante de Juanico en Maturín y ahora radicada en Madrid España.
- ii. José Rafael Márquez Contreras, Licenciado en Educación Integral, habitante de la comunidad del Furrial y ahora radicado en Quito, Ecuador.
- iii. Jacinto Vásquez, Abogado y dirigente político juvenil de Voluntad Popular, habitante de Tipuro y ahora radicado en Texas, Estados Unidos.



CUATRO

AGUA:

EL DERECHO HUMANO QUE ESCASEA EN LA CAPITAL DE MONAGAS

► POR CLAUDIA ELENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

El agua es, sin dudas, un recurso básico que permite al ser humano crecer y desarrollar una vida digna. De allí que el acceso universal al agua potable, segura y asequible se reconozca como un derecho fundamental y, desde hace años, este derecho forme parte de tratados internacionales que buscan comprometer a los Estados en asegurar su gestión y conservación.

Venezuela, al igual que en el resto del mundo, considera que el agua es primordial para el desarrollo y bienestar de la nación; así lo ha reflejado diferentes leyes que manifiestan el compromiso del Estado a asegurar su acceso y correcta gestión. Lamentablemente, en los últimos años, en ciudades como Maturín, capital del estado Monagas, son recurrentes los reportes de fallas en el suministro, deficiencias en su calidad y contaminación de importantes fuentes de agua.

EL AGUA EN MATURÍN

De acuerdo a Alfredo Tineo, especialista con trayectoria en el trabajo en construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento y acueductos, “Maturín se abastece principalmente de dos acueductos: el sistema Bajo Guarapiche con capacidad de 1.250 lts/

seg y el sistema Amana- Maturín con capacidad de 2.500 lts/seg. Asumiendo que la ciudad posee una población de 400.000 habitantes, tendría una demanda de 120 millones de litros/día.”

El Bajo Guarapiche surte: casco central de la ciudad, parte de la parroquia Boquerón, parte de la parroquia Las Cocuizas, sectores como la Av. Orinoco, Av. Bicentenario, calle Azcue, La Manga, Antonio José de Sucre y zonas céntricas. El Amana-Maturín sirve principalmente a los sectores: Fundemos, Los Guaritos, parte de La Puente, La Floresta, Juanico, Av Libertador, La Cruz y otros.

Estos dos acueductos sirven a gran parte de la ciudad pero, por el crecimiento poblacional de los últimos 20 años, nuevos desarrollos urbanísticos se construyeron lejos de ellos. La falta de planes de ordenación y planificación de servicios los dejó sin acueductos; situación que llevó a la perforación de pozos para cubrir esta nueva demanda de agua.

10 AÑOS CON FALLAS

De acuerdo a testimonios de usuarios, las fallas del servicio tienen aproximadamente 10 años. Las más importantes se presentaron tras el primer derrame de petróleo sobre del río Guarapiche del año 2012, desde entonces, el servicio no fue el mismo.

Con respecto a esta situación Tineo explica que, más allá de los problemas presentados con los derrames petroleros, los acueductos tienen otros inconvenientes. “De acuerdo al cálculo de diseño, los dos sistemas en su conjunto son suficientes para satisfacer la demanda de Maturín. Pero hay factores que impiden qué tal condición se cumpla, como: 1- El bajo caudal en época de verano de los ríos Guarapiche y Amana y la falta de reservorios de agua (embalses) para suplir esta deficiencia. 2- Las tomas ilegales en el recorrido de la tubería de conducción del sistema Amana- Maturín y 3- La falta de mantenimiento de las instalaciones.”

También menciona que con respecto al sistema de tuberías de distribución la situación es precaria. “La tubería del sistema Amana-Maturín, tiene largos tramos que están dañados por corrosión, imposibilitando la conducción de suficiente agua. En lo relacionado a la red de distribución del acueducto, debido a más de 40 años sin realizarse cambios de diámetro o construcción de suficientes alimentadores, no se consigue un mejor servicio de distribución”. Betty Palomo vive en el centro de la ciudad. Al preguntarle su opinión respecto al servicio manifiesta lo siguiente:

“El servicio ha empeorado en los últimos 5 años. Anteriormente, contábamos con agua potable de buena calidad y un caudal fuerte las 24 horas, los 7 días de la semana. Actualmente, la frecuencia del servicio es incierta, no tenemos horarios fijos, la calidad del agua es deficiente, su color es beige y con olor a óxido. El caudal es variante, unas veces es fuerte y otras no”.

Esta realidad expresada por Palomo parece igual en toda la ciudad. De acuerdo con una evaluación de servicios realizada por la Asociación Civil Conciencia Ciudadana en 2019, en promedio, los matorineses valoran el servicio de agua como “Malo”.

LA REALIDAD DE LOS POZOS

El crecimiento urbano que se alejó de los acueductos principales, más la falta de nuevos sistemas de captación, obligó a la perforación de pozos para abastecer los nuevos desarrollos del norte, sur, este y oeste de la ciudad, no resultando, en todos los casos, una solución 100% satisfactoria.

Con respecto al uso de pozos, el especialista Tineo comenta que Maturín posee una gran masa de agua subterránea, pero la mayor parte de los acuíferos posee gran cantidad de minerales ferrosos, convirtiéndose en una desventaja de calidad. Otra desventaja son los costos operacionales por la deficiencia en el suministro eléctrico y a la falta de mantenimiento de este tipo de instalación. “En mi opinión no es la solución para el abastecimiento de agua de la ciudad”.

Fátima Gutiérrez vive en la parroquia Las Cocuizas, sector Los Capachos. Su comunidad cuenta con pozo y, respecto a ello, menciona que hay un pozo y un tanque elevado. El agua llega todos los días de 8:00 am a 11:00 pm, pero solo funciona cuando hay luz.

“El agua llega amarilla, creo que porque nadie limpia el tanque de la comunidad. La tubería de la calle está mala, yo pensé que eran problemas en mi casa, pero veo que la matriz se está dañando y ha afectado a varias casas. Hay sectores con pozos fuera de servicio y esas personas caminan con baldes a ríos o quebradas cercanas, pero esa agua les provoca alergias en la piel”.

Por otra parte, Marlene Rodríguez vive en Los Guaritos III Canal 90. Ella indica que su sector forma parte del acueducto, pero la situación es tan grave que perforaron un pozo. Aún así, no está satisfecha con el resultado. “El agua viene sin fuerza. Solo quienes tienen bomba pueden agarrar, quienes



no, deben salir a la acera y llenar baldes. El servicio es muy irregular, llega cada 5 días a las 10:00 pm y lo quitan la mañana siguiente”.

Para casos como el de la señora Marlene, Tineo explica: “Estas son opciones paliativas que se aplican cuando las comunidades no están incorporadas a la Red del acueducto o cuando hay una grave deficiencia de agua. Pero no deben considerarse como soluciones definitivas cuando se dispone de un acueducto capaz de satisfacer la demanda de agua de esos sectores”.

EL ÚLTIMO ESLABÓN DEL SERVICIO: LAS AGUAS RESIDUALES

A las tres entrevistadas se les preguntó si sabían qué pasaba con las aguas residuales de sus casas. Por un lado, las señoras Palomo y Rodríguez indicaron desconocer del tema, mientras que Gutiérrez dijo que en su sector se usan pozos sépticos. “El de mi casa funciona bien, pero mi vecina tuvo que abrir otro. Mi vecino de atrás no tiene y sus desechos los coloca en bolsas y arroja a la calle”.

“Maturín no cuenta con una estación o planta de tratamiento para las aguas residuales. La mayoría de los efluentes de sus redes cloacales se vierten a ríos, caños, quebradas y morichales. La zona norte principalmente al río Guarapiche que, aunque las comunidades de Boquerón y Tipuro disponen de mini plantas de tratamiento, la mayoría están abandonadas. La zona sur hacia el caño Juanico. El centro al caño Orinoco. La parroquia las Cocuizas al río Guarapiche. El Oeste hacia la quebrada de La Puente y al Caño Orinoco. La mayoría de los efluentes van al Caño Juanico a través de



un colector que los conduce hasta un gran estuario llamado Laguna Grande que, por esta misma situación, se encuentra totalmente contaminado”, explicó Tineo.

Por último el especialista mencionó que años atrás se construyó una estación de tratamiento de aguas servidas en el sector Los Tapiales para tratar las aguas del sector Juanico. Tenía una capacidad de diseño de 1.200 lts/seg. Pero, lamentablemente fue abandonada, está fuera de servicio y casi desmantelada. En conclusión, la ciudad no dispone de un sistema de tratamiento de sus aguas servidas.

LA SOLUCIÓN: INVERSIÓN Y PLANIFICACIÓN

En base a los testimonios consultados, Maturín cuenta con sistemas capaces de satisfacer su demanda; pero la falta de inversión y mantenimiento han desmejorado el servicio. Esta realidad incide directamente sobre el bienestar de la población y el desarrollo económico y social de la ciudad.

La situación se vuelve más delicada por el abandono de sistemas de tratamiento de aguas residuales. La

contaminación reduce la posibilidad después de acceso a fuentes de agua de calidad y, en casos como el Guarapiche, dificulta e incrementa el costo de tratamiento.

La solución está en la inversión y recuperación de los sistemas existentes, también en la correcta ordenación y planificación. La ciudad no puede seguir expandiéndose sin una previa planificación de servicios, en caso contrario, terminaría afectando el correcto desarrollo de vida de los futuros habitantes y amenazaría su derecho al acceso universal al agua potable, segura y asequible y a un ambiente sano.

Fuentes:

Testimonio de la Sra Betty Palomo. Costurera y comerciante. Habitante del sector centro.

Testimonio de la Sra. Marlene Arreaza Socióloga. Habitante del sector los Guaritos III Canal 90.

Testimonio de la Sra Fatima Gutierrez. Doméstica y ama de casa. Habitante de Las Cocuizas sector los Capachos.

Entrevista al Ingeniero Alfredo Tineo especialista en construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento y acueductos.

Estudio de calidad de servicios año 2019. Asociación Civil Conciencia Ciudadana.



MONAGAS PROTESTA ANTE LA CARENCIA DE DERECHOS

► MARCO AURELIO HERNANDEZ BETHERMY Y
LUIS VILLAFRANCA

La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela se agudiza con el transcurrir de los días y el estado Monagas no escapa de esa cruda realidad, convirtiéndose en una región marcada por la carencia de servicios públicos, donde los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) no son garantizados por el Estado venezolano.

Contexto que se ve reflejado en las crecientes protestas por la carencia de servicios básicos, como lo son electricidad, gas doméstico, agua potable y gasolina. Es así como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), lejos de observar voluntad política para

impulsar mejoras, evidenció que la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado creció con la llegada de la pandemia, especialmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los

Derechos Humanos concluyó en su informe presentado el 2 de julio de 2020 que las acciones tomadas por el Estado en este contexto “han resultado insuficientes para garantizar un nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales, en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.

AGUA POTABLE, ¿DERECHO O LUJO?

En Monagas el suministro de agua potable para muchos es un lujo, aun cuando este es considerado un derecho humano indispensable, conducente para otros derechos, tales como el derecho a la vida, a la salud y a un nivel de vida digno. Lo que ha desencadenado en un sinnúmero de protestas en el municipio Maturín, particularmente en siete de sus diez parroquias, siendo éstas La Pica, Las Cocuizas, Boquerón, Alto de Los Godos, San Simón, Santa Cruz y El Furrial.

Al cumplir tres meses sin acceso a agua potable, Lismar Medina, habitante del sector Parari de la parroquia La Pica, decidió salir a protestar en compañía de sus vecinos. Se reunieron en la entrada del sector y cuando la concentración alcanzaba las 60 personas decidieron obstaculizar el tránsito para exigir la presencia de un funcionario de Aguas de Monagas para que les ofreciera una solución a corto plazo. No obstante, los primeros en llegar fueron una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quienes exigían el levantamiento inmediato de la protesta.



A los pocos minutos de iniciar la protesta llegaron al menos 10 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) exigiendo en tono amenazante que nos retiráramos del lugar, asegurando que de lo contrario tomarían acciones contundentes. Sin embargo, decidimos no movernos del lugar y seguir exigiendo pacíficamente el suministro de agua potable. Sin embargo, a las pocas horas nos dispersaron”, Lismar, habitante del sector.

Cumplidas las seis horas de protesta ininterrumpida una camioneta identificada con la unidad de traslados del Internado Judicial del Estado Monagas y conducida por funcionarios del Estado avanzaron abruptamente y sin mediar, logrando así dispersar a los manifestantes. Evidenciando, una vez más, el reprochable accionar de los cuerpos de seguridad contra la ciudadanía que exige la garantía plena de sus derechos fundamentales.

PERSONAS MAYORES, CARENCIAS DIFERENCIADAS

La emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país tiene consecuencias negativas para la población en general, aunque es sabido que el peso de esta se desbalancea, implicando mayores

desafíos para un sector de la población que para el otro. Los retos que enfrentan las personas mayores son significativos, pues su condición, a lo que se suma la realidad nacional, los hace depender en gran medida del auxilio económico de familiares, cuando no de los programas sociales del Estado, que cada día son más precarios.

Mirna Sandoval*, vive desde hace tiempo en Campo Miraflores, perteneciente a la población de Quiriquire, Municipio Punceres. Asegura que, al igual que ella, la mayoría de sus vecinos están “a la buena de Dios”. Estas personas reciben pensiones por parte de PDVSA o algún otro organismo público, pero insisten en que es poco para lo que les alcanza.



El Gobierno dice que envía bolsas de comida a las comunidades. Aquí llegan cada cuatro, cinco y hasta seis meses, no llega con regularidad.

Pese a que el Estado venezolano asegura mantener esfuerzos significativos para garantizar a la población el derecho a la alimentación por medio de los CLAP de manera equitativa, la señora Sandoval relata que cuando las bolsas llegan a su comunidad, son repartidas “de la forma que mejor les parece a lo Consejos Comunales”.

Los niveles de hiperinflación en Venezuela, las pensiones que no alcanzan para cancelar o comprar los medicamentos ni la totalidad de la canasta básica,

son algunos de los efectos de la emergencia humanitaria compleja, agravada ahora por la Covid-19. Esto dificulta la subsistencia de las personas mayores, quienes encuentran trabas para reinventarse y diversificar sus actividades económicas, ya que además muchos dependen de las remesas de sus familiares en el exterior que envían cada cierto tiempo.

ACCESO AL AGUA Y ENFERMEDADES NO CONTROLADAS

El acceso al agua es un derecho humano reconocido internacionalmente. Implica un servicio público que el Estado debe garantizar a toda la población por igual, pues entraña, así como otros derechos de carácter prestacional, la posibilidad de tener acceso a una óptima calidad de vida, por lo cual son necesarias políticas públicas que tiendan a minimizar los riesgos de contraer enfermedades causadas por el consumo de agua insalubre.

En esta misma tónica, la señora Sandoval confirma que un brote de hepatitis se generó recientemente, coincidiendo con la llegada de las lluvias, pero que es también producto del mal tratamiento del agua, asegura.

Asimismo, el acceso a agua potable, apta para el consumo humano escasea cada vez más. El cuadro que se presenta coloca a las personas mayores en clara indefensión ante enfermedades que, con inversión suficiente y medidas tempranas de prevención, podrían controlarse, pero también representa un reto significativo para la adopción de medidas preventivas contra la Covid-19, pues organizaciones como la Organización Mundial de la salud (OMS) insisten en el lavado de manos como una medida necesaria frente al nuevo virus.



Anteriormente, ya veníamos presentando problemas en cuanto al acceso al agua en la comunidad y esto se ha agravado con el tiempo, porque casi no llega y, cuando llega, se nota que no es apta para tomarla por el color oscuro”.

En Venezuela es cada vez más notorio el resurgimiento de enfermedades que anteriormente estaban controladas. El dengue o la malaria están a la orden del día, y esto ocurre por falta de políticas gubernamentales tendientes a minimizar la proliferación de vectores y agentes contagiosos. Pero ante la actual pandemia, las consecuencias imprevisibles en las personas mayores son motivos de alarma quienes sin lugar a dudas son un sector de la población invisibilizado.

Es importante destacar que, según el testimonio recogido en la

población de Quiriquire, las personas mayores han optado, pese a las precarias condiciones en las que viven, no ejercer su derecho a la manifestación pacífica, en ocasiones por miedo, otras por falta de esperanza en que lleguen las soluciones de sus problemas por parte de las autoridades gubernamentales. Aunque pareciera, impera el hecho de no ser este un sector típicamente proclive a ejercer tal facultad.

¿DERECHOS EN CUARENTENA? PUNTOS A CONSIDERAR

El concepto mismo de derechos humanos nos evoca la idea de la dignidad humana, es decir que todos somos merecedores de una serie de derechos por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Sin embargo, de la misma manera, implica excluir la interferencia del Estado en áreas de la vida individual de las personas, permitiendo asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado. Esta definición de los derechos humanos nos permite elevar la garantía del acceso de los servicios públicos a dicha categoría, acentuando la importancia de tomar medidas que a todos beneficien y tomen en consideración las necesidades de todas las personas.

En una región como Monagas, se acentúan cada día más las carencias relacionadas al ejercicio de los DESCAs, derechos de carácter prestacional y que dignifican, cuando no son garantizados, la vida misma de los ciudadanos.



A partir de la pandemia por Covid-19 se agrava la realidad de muchas personas en la región, pues las dificultades preexistentes vienen a sumarse a un contexto extraordinario para el que nadie esperaba ni podía prepararse.

Urge que el Estado venezolano tome todas las medidas conducentes para garantizar los derechos

de la población y, alivie el sufrimiento de esta, coordinando acciones con diversos actores humanitarios de reconocida trayectoria, así como también adopte medidas que respete el ejercicio del derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos que reclaman la prestación de servicios básicos.

|||||

* Mirna Sandoval, nombre ficticio para resguardar identidad

Bibliografía

Crónica Uno: Primer semestre de 2020 cerró con más de 4000 protestas y la mitad fueron por servicios públicos [en línea] <https://cronica.uno/primer-semestre-de-2020-cerro-con-mas-de-4000-protestas-y-la-mitad-fueron-por-servicios-publicos/> Consultado del 26.07 al 29.07.2020

CEPAZ: Alta Comisionada Michelle Bachelet presentó su informe “Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela” [en línea] <https://cepaz.org/noticias/alta-comisionada-michelle-bachelet-presento-los-resultados-de-la-investigacion-de-las-denuncias-de-posibles-violaciones-de-los-derechos-humanos-a-la-vida-la-libertad-y-la-integridad-fisica-y-moral-en/> Consultado del 27.07 al 29.07.2020

Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 8 [en línea] <https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-15-derecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-internacional>

LOS QUE NO SE RINDEN, REDHANZ: ÚNICOS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN ANZOÁTEGUI

► POR FRANCISCO ZAMBRANO/RUNRUNES

Quince organizaciones civiles conforman una alianza para velar por los derechos de los venezolanos.

En vista de que la emergencia humanitaria compleja ya estaba causando estragos, 15 organizaciones no gubernamentales del oriente venezolano optaron por unirse el pasado 10 de agosto de 2019 y formaron la Red de Organizaciones de Derechos Humanos del estado Anzoátegui (Redhanz).

De acuerdo con Alejandra Olivares, vocera de Redhanz y presidenta de la ONG Defensa en Acción, la iniciativa surgió en vista de la necesidad de trabajar mancomunadamente para luchar por los derechos humanos del venezolano.

“

La inquietud que todos
teníamos es que había muchas
organizaciones valiosas en
Anzoátegui, sin embargo no
estábamos conectadas. Hoy en
día hay más comunicación y
es más fácil a la hora de elevar
una exigencia”, dijo Olivares.



Dentro de los objetivos de Redhanz está buscar, recibir y difundir conocimientos que sirvan para fortalecer la defensa de los derechos humanos, además de compartir experiencias y alianzas con organismos nacionales e internacionales.

Desde 2017, Olivares preside Defensa en Acción, una ONG que atiende a personas detenidas y ofrece apoyo a víctimas en caso de torturas, tratos inhumanos y degradantes.

“Entendimos que la vulneración a los derechos humanos del venezolano tiene múltiples dimensiones, por ejemplo si tenemos un problema de agua eso va a repercutir en la salud y en ese sentido tenemos organizaciones que trabajan en pro del agua y la salud. La idea es potenciar la labor de todas las organizaciones”, sostuvo Olivares.

Redhanz está formada por: Defensa en Acción, Súmate, Caritas, Fenasopadres, Fundación La Tortuga, Sin Mordazas, Vidas, Democracia Emprendedora, Centro de Formación para la Democracia, Asociación Venezolana para la Hemofilia, Fundación pro Defensa para la Educación y la Niñez, Gente del Petróleo, Agua para Todos, Fundación Venezuela sin Barreras y Cátedra para la Paz.

“Tenemos organizaciones educativas, humanitarias, que trabajan los servicios públicos, de salud, formativa, electoral, de niños y adolescentes, ambientales, de libertad de expresión, cada una tiene su campo de trabajo, pero a la vez están compenetradas con las demás”, añadió Olivares.

Olivares indicó que el hecho de trabajar en coalición ha rendido frutos. “En el pasado mes de diciembre fueron incautados unos medicamentos de la Asociación Venezolana para la Hemofilia en Clarines, estos pudieron recuperarse gracias al apoyo de todos y a las redes sociales”.

La vocera de Redhanz manifestó que la pandemia de la Covid-19 los puso en una encrucijada. “Pero eso nos impulsó a crear nuevas iniciativas, surgieron cosas interesantes como algunos forochats que hicimos con defensores de los derechos humanos como Marino Alvarado de Provea, Alí Daniels de Acceso a la Justicia y Cristian Correa del Centro Internacional de Justicia Transicional, concursos de dibujo infantil y un índice de escasez de medicina en el municipio Sotillo en alianza con Convite”.

Además de Convite, Redhanz ha hecho alianzas con otras instituciones como con la Coalición Anticorrupción de Transparencia Venezuela y Caritas.

También patrocinaron un evento llamado “Música por medicinas” en noviembre de 2020, otro de nombre “Hagamos el Bien” con Caritas y llevaron donativos a la Casa de Cuidado José Gregorio Hernández y al Hospital Luis Razetti en Barcelona.



“

Nos alejamos de lo que es la vinculación político-partidista, nuestro único propósito es realizar un trabajo en base a nuestras creencias que sea dirigido a la gente”. indicó Olivares.



Más presencia en el sur. De acuerdo con Olivares, el radio de acción de Redhanz comprende los municipios Juan Antonio Sotillo, Diego Bautista Urbaneja, Simón Bolívar y Guanta del estado Anzoátegui.

Pero la intención de la red es abarcar a la mayor parte del estado, especialmente municipios ubicados en el sur como el Independencia, Francisco de Miranda, José Gregorio Monagas y Simón Rodríguez.

“

Es un área que está bastante desasistida, el problema de la movilidad es serio y ese es un reto que tenemos. Salud, educación y servicio de agua son las principales flaquezas en el estado”, sostuvo Olivares.

Para Olivares, la capacitación y formación en el área de derechos humanos es fundamental y en ello se centraron en 2020.

“En este último año pudimos realizar ocho capacitaciones, sentimos que hay mucha necesidad de formación, hay mucho interés de las personas por aprender, hemos entendido que para hacer un buen trabajo de derechos humanos hay que capacitarse y aprender”.

Sentenció que aquellos que deseen tender la mano pueden escribir al correo electrónico redhanz.venezuela@gmail.com o a la cuenta en Instagram @redhanz.ve.

“La defensa de los derechos humanos no es un trabajo solo de las organizaciones, no es momento de quedarse cruzados de brazos, aportar para tener soluciones es tarea de todos”, dijo.

EN MATURÍN IMPROVISAN VERTEDEROS DE BASURA ANTE LA FALTA DE ASEO URBANO

► POR NATACHA SÁNCHEZ

Alrededor de ocho comunidades en Maturín han improvisado vertederos de basura ante la carencia de aseo urbano. Cohabitar con los olores, insectos y hasta el humo de la basura quemada se ha vuelto una constante para quienes claman a las autoridades una pronta solución.

La falla en la recolección de desechos es un problema que se ha generado en casi todas las comunidades del municipio. Los montones de basura bordean Maturín y los habitantes de sectores como: La Libertad, Santa Inés, La Gran Victoria, Guanaguanay, Paramaconi, 19 de abril, Antonio José de Sucre, avenida principal de La Cruz e incluso el centro de la ciudad, se han tenido que acostumbrar a la falta de aseo urbano, por lo que han decidido improvisar vertederos de basura para deshacerse de los desechos.

Bolsas de basura, cajas de desechos, malos olores e incluso animales muertos han hecho que exista un foco de contaminación y proliferación de insectos y roedores, convirtiendo esto en uno de los problemas más denunciados por los ciudadanos.

En La Libertad de Maturín, las pilas de basura se pueden observar desde la entrada del sector y esto ha traído consecuencias perjudiciales y enfermedades tales como:

Asma, afecciones respiratorias y escabiosis, las cuales se han vuelto comunes en la comunidad y que no solo afectan a los habitantes del sector, sino también a los niños que asisten al preescolar que se encuentra a pocos metros del vertedero.



“Desde hace años, no vienen a recoger la basura; aquí venían semanalmente y desde que el alcalde tomó posesión solo se recoge la basura que se encuentra cercana a su casa. Para nadie es un secreto que toda Maturín está así. Pero ya nosotros no aguantamos más”, manifiesta Reinaldo Rodríguez.

Los hedores cada vez se vuelven más insoportables mencionan los vecinos. A pesar de que han solicitado el apoyo en varias oportunidades, no han sido tomados en cuenta. Por lo que han buscado otras alternativas para evitar la acumulación de la basura, en oportunidades optan por quemarla. Pero esto, más allá de una solución, agrava el problema sobre todo por el preescolar que está ubicado justo en frente del basurero.

“

Tengo a mis niños aquí en el preescolar y se ven afectados por los olores; también cuando queman es horrible el humo. Estos niños comen con esos hedores y algunos hasta padecen de asma y no vienen a la institución”, detalla Carmen Arévalo, representante.

20 FAMILIAS AFECTADAS POR UN VERTEDERO IMPROVISADO

Alrededor de cinco años sin aseo urbano tienen los habitantes de La Cruz, específicamente la avenida principal, a la altura de la plaza del sector. Son más de 20 las familias que padecen por los hedores y la quema de los desechos cada tarde.

“Este farallón se ha convertido en el basurero público. Toda la gente de La Cruz viene a botar la basura para acá porque el aseo no pasa ni siquiera por la avenida principal. Esto afecta a muchas familias conformadas por personas mayores e incluso mujeres embarazadas”, resaltó un habitante de la zona.

A este basurero acuden no solo habitantes de La Cruz, sino también de sectores aledaños. Los vecinos afirman que esta situación es de conocimiento de los Consejos Comunales pero hasta ahora no ofrecen una solución. “El patio de mi casa es un basurero, y cuando la queman esto se llena de humo y atrae microbios. Yo tengo una niña con una condición especial y eso le afecta”.

CARRETILOS: LA NUEVA OPCIÓN PARA RECOGER LA BASURA

Desde hace más de dos años en la Zona Industrial de Maturín no funciona el servicio de aseo urbano, situación que se replica en otros sectores del municipio. La aparición de los carretilleros es una opción para los vecinos quienes esperan a estos jóvenes para deshacerse de los desechos. El gobierno ha anunciado planes para atender este problema, pero los ciudadanos afirman que ninguno se ha cumplido.

El aseo urbano en la ciudad de Maturín es un servicio casi inexistente. Los camiones compactadores solo circulan por las avenidas principales, pero no hacen el recorrido acostumbrado en urbanismos, por lo que vecinos han tenido que buscar otras opciones para deshacerse de los desechos.

Ante esta situación, ha surgido la figura de los denominados carretilleros, que son jóvenes que se dedican a caminar por las calles de los distintos urbanismos de la ciudad, con la intención de cargar en sus carretillas con la basura de los ciudadanos.

Esta nueva forma de recolección de desechos se ha replicado en varios sectores de la ciudad. Los jóvenes acostumbran a realizar el servicio a cambio de comida o una colaboración en dinero en efectivo. Aseguran que la basura que recolectan en la Zona Industrial, por ejemplo, es llevada hasta la avenida Bella Vista pues en las noches el aseo solo circula por esta principal arteria vial.

La dinámica consiste en caminar calle por calle ofreciendo el servicio. Los vecinos al no tener otra opción los esperan para botar la basura, tal como se estilaba anteriormente con los camiones del aseo urbano.



Yo salgo tempranito de mi casa, como a las 6:00 a. m. y el trabajo como tal lo comienzo a las 8:00 a. m., dando tiempo de que la gente se despierte y pueda sacar la basura. Con la cuarentena yo salgo con mi tapabocas, pero no me puedo quedar en la casa, porque si no me muero de hambre. Es embuste que el Gobierno me va a llevar comida”, comenta William García, joven perteneciente al grupo decarretilleros.

En la Zona Industrial son alrededor de 20 los jóvenes que se dedican a esta práctica, se distribuyen por días las zonas y calles que recorrerá cada uno. En su mayoría resuelven la comida diaria de esta manera. Caminar de calle en calle les garantiza que al menos tendrán para comer en la noche.

“Cuando llega la caja CLAP –bolsas de comida subsidiada entregada por el gobierno- la gente me regala arroces, harinas y granos más que todo. Eso me lo van dando cuando voy haciendo el recorrido. Yo nada más recorro Las Cayenas y Las Garzas. Los demás sí van para las otras urbanizaciones. Pero como estas son grandes me canso bastante”, cuenta García.

Los vecinos de la Zona Industrial de Maturín ya no esperan los camiones compactadores, están conscientes que desde hace más de dos años el servicio no existe, al menos en esa zona, por lo que han hecho común amontonar los desechos hasta que pase el carretillero.



Nosotros aquí en Las Garzas no contamos con aseo desde hace mucho, si no fuera por esos muchachos que nos sacan la basura de las casas, tendríamos que lidiar con un mosquero o lanzar la basura al final de la calle. Cada vez que ellos pasan yo le doy una colaboración porque ellos no cobran un monto específico, a veces les damos comida también”, detalla Minorka Centeno.

PLANES QUE HAN QUEDADO EN PAPEL

En 2018 fue relanzado el plan denominado Basura 0, en el cual serían incorporados 12 camiones, una compactadora y más de 3.140 personas como parte de las cuadrillas de limpieza.

Para el 2019 las autoridades afirmaron que las labores de recolección de desechos sólidos se intensificarían como parte del Plan Venezuela Bella; sin embargo, los ciudadanos afirman que esto no se ha cumplido.

En 2020 y 2021 la carencia del aseo urbano es una realidad. Los habitantes de diferentes comunidades afirman que el servicio hace mucho que dejó de funcionar, e incluso la improvisación de vertederos de basura y quema de desechos ha aumentado con el pasar de los meses.

← © FOTO: SHUTTERSTOCK



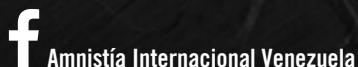
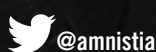
“

**LAS AUTORIDADES SE NEGARON
A RECONOCER LA VERDADERA
MAGNITUD DE LA EMERGENCIA
HUMANITARIA Y DEL DETERIORO
DE LAS CONDICIONES DE VIDA.
LA POBLACIÓN SUFRIÓ SEVERAS
SITUACIONES DE ESCASEZ DE
ALIMENTOS, MEDICINAS,
SUMINISTROS MÉDICOS, AGUA
Y ELECTRICIDAD”**

INFORME ANUAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL

CAPÍTULO VENEZUELA



[amnistia.org](https://www.amnistia.org)

**AMNISTÍA
INTERNACIONAL**

